MONARQUÍA EN DEMOCRACIA

EL REINO UNIDO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II (1952-2022)

Seminario organizado por la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
con la colaboración de la
Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas
(REMCO)

FEBRERO DE 2023

REAL ACADEMIA DE
CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

MONARQUÍA EN DEMOCRACIA

EL REINO UNIDO DURANTE EL REINADO DE ISABEL II (1952-2022)

Seminario organizado por la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
con la colaboración de la
Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas
(REMCO)

FEBRERO DE 2023

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS

ÍNDICE

I

Sesión solemne bajo la presidencia de S.M. el Rey

INTERVENCIÓN DE SU MAJESTAD EL REY 11

BENIGNO PENDÁS GARCÍA 13

MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN 19

PEDRO SCHWARTZ GIRÓN 23

EMILIO LAMO DE ESPINOSA MICHELS DE CHAMPOURCIN 27

ARACELI MANGAS MARTÍN 33

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO 41

II

Segunda sesión moderada por Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin

TOM BURNS MARAÑÓN (periodista) 51

YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ (directora del CEPC) 61

MANUEL ARAGÓN REYES (magistrado emérito del TC) 83

CHARLES T. POWELL (vicepresidente de REMCO) 93

III

"*GOD SAVE THE KING*".
Una reflexión sobre rituales y arquetipos culturales
Ponencia presentada en Pleno de la Real Academia

RICARDO SANMARTÍN ARCE 109

CHARLES POWELL

Los legados de la Reina Isabel II de Inglaterra

Durante el largo y fecundo reinado de Isabel II (1952-2022), tanto el Reino Unido como la propia institución monárquica conocieron cambios muy profundos, que transformaron a ambos casi por completo. En este breve texto analizamos tres de los aspectos del legado de dicha Reina que a nuestro modo de ver ofrecen especial interés: su función estrictamente política, y esencialmente doméstica; su contribución a la evolución de la política exterior del Reino Unido y el lugar que ocupa en el mundo; y su papel institucional como cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra.

El análisis y la comprensión de las funciones políticas desempeñadas por la Reina Isabel II chocan casi de inmediato con tres grandes dificultades. La primera de ellas no es otra que la ausencia de una Constitución escrita, en la que, como ocurre en otros Estados democráticos en los que persiste la Monarquía, se describa a grandes rasgos (o, en casos como el de Japón, con cierto detalle) el funcionamiento de la jefatura del Estado.Al mismo tiempo, y debido a la discreción (cuando no el secreto) que debe rodear buena parte de su actividad para resultar eficaz, tampoco abundan los documentos escritos ni las fuentes orales que permitan hacerse una idea cabal de sus inquietudes o preferencias políticas. La tercera dificultad nace de la percepción, muy ampliamente extendida, de que, por tratarse de la Monarquía parlamentaria más asentada del mundo, también es la más consolidada en lo que a cuestiones tales como la relación entre el

monarca y su primer ministro se refiere. En realidad, y como veremos a continuación, el papel político de la Reina estaba mucho menos definido de lo que cabría esperar cuando llegó al trono en 1952, y experimentó cambios muy similares a los vividos por otros jefes de Estado en las Monarquías parlamentarias contemporáneas del resto de Europa.

La ausencia de una Constitución escrita hace que, a menudo, los estudiosos de la Monarquía británica acudan a la fórmula consagrada por Walter Bagehot en su famoso libro *The English Constitution* (1867), según la cual el monarca tiene el derecho a ser consultado, el derecho a animar (o exhortar), y el derecho a advertir (o prevenir). Curiosamente, a pesar de su popularidad, dicha fórmula a menudo se cita incorrectamente, dando lugar a la aparición de un novedoso 'derecho a aconsejar' nunca contemplado por Bagehot. Ello no hace sino poner de manifiesto la ambigüedad inherente a la misma, y la dificultad de interpretar la actuación del monarca a la luz de estos tres atributos.

Quizás resulte más útil, en este sentido, la caracterización realizada por el periodista y escritor Sir Antony Jay (muy conocido como uno de los guionistas de las maravillosas series de televisión 'Yes, Minister' y 'Yes, Prime Minister', que alcanzaron gran popularidad en los años ochenta del siglo pasado), que distingue entre el papel del monarca como jefe del Estado y como jefe de la nación. Entre las funciones que realiza como jefe del Estado, cabe citar su relación con el jefe del Ejecutivo, el Gabinete, y el Parlamento; su actuación en el ámbito de la política exterior, y muy especialmente, como cabeza visible de la Commonwealth; su papel como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (una dimensión a la que generalmente no se le otorga la importancia que sin duda tiene); y por último, su actuación como *defender of the faith and supreme governor* (defensora de la fe y gobernadora suprema) de la Iglesia de Inglaterra, y también como protectora de la Iglesia de Escocia. El segundo ámbito de actuación de la monarca, como jefe de la nación, contemplaría aspectos tales como su capacidad para encarnar y representar al pueblo británi-

co (compuesto formalmente por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte); su identificación con la historia y los valores del país, y muy especialmente, con los momentos más críticos de la misma (como la lucha contra el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial); y por último, su papel como símbolo e icono cultural, que han contribuido a dotar al Reino Unido de un notable 'poder blando.'

En lo que a la función estrictamente política se refiere, cabe recordar que a lo largo de setenta años de reinado Isabel II convivió con quince primeros ministros, la mayoría de ellos (once) pertenecientes al partido Conservador. Antes de su llegada al trono, el país tan solo había tenido dos primeros ministros Laboristas: Ramsay MacDonald y Clement Attlee. El primero de ellos gobernó en solitario en 1924 y de nuevo en 1929-35, cuando el Laborismo experimentó una dolorosa escisión que le obligó a formar una coalición con el partido Liberal, decisión que le costaría la expulsión de su propio partido. Por su parte, Attlee fue el primer dirigente Laborista en gobernar con una amplia mayoría parlamentaria (1945-51), hecho que le permitió sentar las bases del Estado de Bienestar contemporáneo. Sin embargo, a continuación se sucedieron en el poder cuatro primeros ministros conservadores: Winston Churchill (1951-55); Anthony Eden (1955-57); Harold Macmillan (1957-63) y Alec Douglas-Home (1963-64). Todos ellos eran grandes patricios pertenecientes a la élite social y económica del país, y todos ostentaban títulos nobiliarios (salvo Churchill, que rechazó el que le ofreció la Reina, pero que había nacido en el palacio de Blenheim y era descendiente directo del duque de Marlborough). En suma, durante la primera década larga de su reinado se consolidó la percepción de que los conservadores eran *the natural party of Government*', es decir, la única organización política capaz de ejercer el poder y legitimada para hacerlo. Por ello mismo, durante el mandato del dirigente Laborista Harold Wilson (1964-70), la Reina Isabel II se esforzó en forjar una excelente relación personal con el primer ministro (y darla a conocer públicamente), ya que le interesaba demostrar que la Corona podía colaborar lealmente con el Laborismo, y viceversa.

(Algo similar había ocurrido con el Rey Jorge V y el primer ministro MacDonald en los años veinte.) Posteriormente, y por idénticos motivos, Isabel II también cultivaría al segundo primer ministro Laborista de su reinado, Jim Callaghan (1976-79). A decir de numerosos historiadores, ello contribuyó notablemente a la aceptación de la Monarquía por parte de los sectores más recalcitrantes del Laborismo, sobre todo en el movimiento sindical, que tradicionalmente habían visto en la institución un obstáculo a la modernización social y económica del Reino Unido. En suma, la Reina realizó una importante aportación al buen funcionamiento del sistema político británico al contribuir tanto a la normalización de la alternancia en el poder de las dos grandes fuerzas políticas que dominaron la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, como a facilitar la aceptación de la institución monárquica por parte de una de ellas.

También cabe subrayar la importancia de la Reina como símbolo de la unidad del Reino Unido, sobre todo en épocas en las que ciertas fuerzas centrifugas adquirieron un protagonismo creciente, sobre todo en Escocia, pero también en Gales e Irlanda del Norte. Dada la neutralidad política que siempre procuró observar, Isabel apenas pudo manifestar públicamente sus preferencias unionistas a lo largo de su reinado. Sin embargo, en un discurso pronunciado en el Parlamento en mayo de 1977, cuando estaba adquiriendo cierta intensidad el debate en torno a la posible creación de un Parlamento escocés, la Reina se refirió explícitamente a la importancia que otorgaba al hecho de haber jurado defender la unidad del Reino Unido cuando fue coronada, de lo cual podía deducirse su escaso entusiasmo por todo aquello que pudiese suponer una amenaza para la misma. Esta defensa del estatus quo no solo molestó a los nacionalistas escoceses, sino que además suscitó sentimientos encontrados en el Laborismo, como resultado de lo cual Callaghan no le manifestó su apoyo con la contundencia que hubiese sido deseable. Esta experiencia poco alentadora no hizo sino confirmar a la Reina en su determinación de ser exquisitamente neutral en los debates que pudieran producirse en el futuro sobre esta espinosa cues-

tión. A pesar de ello, en vísperas del referéndum sobre la independencia de Escocia celebrado en 2014 (y que finalmente fue rechazada con 45% de votos a favor y 55% en contra), la monarca comentó en público que los escoceses debían 'pensar muy cuidadosamente sobre el futuro' antes de acudir a las urnas, observación que los partidarios de la secesión consideraron una intromisión injustificada en el debate político. (Cabe recordar, en este sentido, que el gobierno del Partido Nacionalista Escocés, que había impulsado la celebración del referéndum, se había mostrado partidario de que la monarca pudiese convertirse en Reina de una Escocia independiente, posiblemente para tranquilizar a quienes les producía cierto vértigo la posibilidad de una secesión.) Poco después, el primer ministro, David Cameron, cometió la indiscreción de comentar en privado (aunque un micrófono inoportuno recogió sus palabras) que Isabel se había mostrado muy complacida cuando le comunicó el resultado.

Los instintos 'unionistas' de la Reina ya se habían puesto de manifiesto algunos años antes, en vísperas del referéndum sobre la independencia de Quebec celebrado en 1995, cuando un periodista separatista le jugó la mala pasada de llamarla por teléfono haciéndose pasar por el primer ministro canadiense, Jean Chretien, para pedirle que manifestara públicamente su apoyo a la unidad de Canadá, país cuya jefatura del Estado ostentaba, a lo que accedió inmediatamente. Paradójicamente, a pesar de que la conversación fue grabada y transmitida por la radio, no cabe descartar que el hecho de que la Reina se expresara en un excelente francés y se mostrara profundamente interesada por el futuro político del país influyera favorablemente en el resultado del referéndum, en el que la opción secesionista sería derrotada por tan solo un 50.8% de votos en contra y 49.4% a favor.

La aportación de la Reina Isabel II a la política exterior británica, y, sobre todo, a la redefinición gradual del papel internacional del Reino Unido, también merece cierta atención. Ante todo, la monarca facilitó el cambio de estatus que experimentó el país a partir de la segunda posguerra mundial, y muy espe-

cialmente, a raíz de la pérdida de su condición de imperio tras otorgar la independencia a la India (y Pakistán) en 1947. Esta transición de Imperio de alcance global a potencia media europea no resultó sencilla, y podría decirse incluso que sigue inconclusa, lo cual explicaría (al menos en parte) el resultado del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, celebrado en 2016.

La acción diplomática de la Reina Isabel II se plasmó en cuatro grandes líneas de actuación. En primer lugar, y en vista de la importancia que había adquirido la relación con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto que vivió con gran intensidad debido tanto a su juventud como al hecho de haberse alistado a las fuerzas armadas, Isabel contribuyó de forma decisiva a la supervivencia de la *special relationship* (expresión acuñada por Churchill en 1944) entre ambos países, al menos hasta el cambio de siglo. En contra de lo que podría pensarse, dada la natural afinidad lingüística y cultural existente entre británicos y estadounidenses, ello no fue tan sencillo como pudiera parecer a primera vista. Así pues, al poco tiempo de iniciarse su reinado se produjo la crisis del Canal de Suez (1956), durante la cual Washington puso claramente de manifiesto su oposición a las ensoñaciones coloniales británicas, y cuyo desenlace marcó en cierta medida el principio del fin del estatus del Reino Unido como gran potencia de proyección global. De ahí la importancia de su primera visita de Estado a EEUU, realizada en 1957, durante la presidencia de Dwight Eisenhower. Más adelante, la relaciones con Washington se resintieron gravemente por culpa de la guerra de Vietnam, en la que los dirigentes Laboristas se negaron a participar, tensión que se pretendió superar mediante la visita de Richard Nixon a Londres en 1970, y la participación de la Reina en la conmemoración del bicentenario de la independencia de EEUU en 1976. Más adelante, la administración de Ronald Reagan no vio con buenos ojos —al menos en un primer momento— la decisión de Margaret Thatcher de liberar a las Islas Malvinas por la fuerza tras su ocupación por tropas argentinas, y la visita del presidente a Inglaterra en 1982, durante la cual pudo cumplir su

sueño de montar a caballo con la reina, contribuyó a garantizar el decisivo apoyo logístico estadounidense a una compleja operación militar.

Isabel II también fue siempre consciente de la importancia de contribuir a la reconciliación con los países a los que el Reino Unido se había enfrentado en el pasado reciente, y de fomentar en la medida de lo posible una reconciliación duradera. Su primera visita de Estado a la India independiente, realizada en 1961, suscitó un gran interés, hasta tal punto que dos millones de indios se echaron a las calles de Nueva Delhi para aclamarla. De forma parecida, su primera estancia en Alemania Occidental en 1965, de una semana de duración, fue muy bien recibida por la población local, que hizo gala de un entusiasmo solo superado durante la visita del presidente John F. Kennedy dos años antes. Algo parecido cabe afirmar de su visita a Japón en 1975, que fue seguida por 75 millones de telespectadores japoneses, la mayor cifra jamás registrada para un acontecimiento televisado en dicho país. (Antes, en 1971, el Emperador Hirohito había estado en Londres, donde algunos veteranos de la segunda contienda mundial le dieron la espalda al paso de su carroza en señal de repulsa.) Ciertamente, este tipo de actos multitudinarios podían deparar algunas sorpresas: durante su primera visita a la Alemania reunificada, en 1992, la Reina se detuvo en Dresde, ciudad que había sido bombardeada por los británicos en 1945 con especial contundencia, provocando varias decenas de miles de víctimas mortales. Sin embargo, los ciudadanos de Leipzig, que también había sufrido bajo las bombas británicas durante la contienda mundial, sobre todo a finales de 1943, la recibieron muy cordialmente poco después. Curiosamente, la vista más emotiva de todas las realizadas durante su largo reinado posiblemente fuese la que efectuó a la vecina Irlanda en 2011, la primera protagonizada por un jefe de Estado británico a dicho país desde que se independizara en 1916, en la que visitó Croke Park, el estadio en el que tuvo lugar una matanza de espectadores indefensos en 1920 durante el llamado 'domingo sangriento.' Fue quizás en esta ocasión cuando mejor se pudo constatar la notable capacidad de

la Corona para encarnar y simbolizar la historia de un país y contribuir a la reconciliación entre Estados y sociedades largamente enfrentados.

Como es sabido, durante el reinado de Isabel II el Reino Unido siempre mostró una actitud ambigua hacia el proceso de integración europeo iniciado en los primeros años cincuenta, y que adquirió cierta consistencia tras la firma de los Tratados de Roma (1957). Una vez tomada la decisión de solicitar la adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), el gobierno británico pidió a la Reina que estuviese especialmente atenta con el presidente Charles de Gaulle durante la visita de Estado que realizó en 1960, lo cual no fue obstáculo para que luego vetara el ingreso del Reino Unido en 1963 y de nuevo en 1967. Superado el veto francés, y a sugerencia del primer ministro Edward Heath, en 1972 la Reina visitó tres de las seis capitales de los Estados fundadores de la Comunidad en vísperas de la votación parlamentaria que debía aprobar la adhesión británica, periplo que algunos criticaron por entender que el gobierno había utilizado descaradamente la figura de la Reina con fines políticos. Sin embargo, la monarca parece haber sido plenamente partidaria de la adhesión, como pondría de manifiesto en el discurso de Navidad (el único que el gobierno no le escribía) que pronunció en diciembre de 1972, y ello a pesar del malestar que causó el ingreso del Reino Unido en la Comunidad en algunos de sus dominios, y muy especialmente en Australia y Nueva Zelanda, cuyas exportaciones agrícolas se verían seriamente perjudicadas. (Australia incluso modificó su himno nacional en protesta por ello.) Más adelante, la visita a Londres del escasamente anglófilo presidente Valéry Giscard d'Estaing en 1976, y la de la Reina Isabel a Alemania en 1978, sirvieron sobre todo para transmitir el mensaje de que el Reino Unido pretendía ser un socio leal y plenamente comprometido de la Comunidad. Como es sabido, esta sintonía se vio cuestionada durante el mandato de Margaret Thatcher, que nunca permitió a la Reina dirigirse al Parlamento Europeo, algo que solo pudo hacer en 1992, a petición de John Major, que pretendió aprovechar su presencia para facilitar la

digestión del recientemente aprobado Tratado de Maastricht, que muchos británicos vieron como el inicio de un proceso que conduciría irremisiblemente a la creación de un Estado federal europeo, algo que muy pocos deseaban.

Por los motivos antes mencionados, no resulta fácil saber a ciencia cierta cual era la actitud de la Reina Isabel hacia el proyecto europeo. De los escasos testimonios orales existentes al respecto cabe deducir que apoyó sin ambages la adhesión de 1973, pero que paradójicamente, y al igual que muchos de sus compatriotas, en el fondo compartía la visión de De Gaulle de una *Europe des patries*, que no pusiese en peligro las soberanías nacionales de los Estados europeos. A partir de los años noventa, parece incluso haber sentido cierta preocupación por la supuesta deriva federal de la Unión Europea, debido, sobre todo, a lo que ello pudiese suponer para el futuro de las jefaturas de Estado de las Monarquías parlamentarias de Europa. En algún encuentro a puerta cerrada con académicos especialistas en la integración europea se le planteó la posibilidad de que, lejos de suponer una amenaza para ellas, una Europa cada vez más integrada seguiría necesitando a figuras que encarnasen la historia, continuidad e identidad de sus respectivas comunidades nacionales, argumento que no le resultó suficientemente convincente. Sea como fuere, no existe evidencia alguna de que Isabel II fuese partidaria del 'Brexit' en el referéndum de 2016, y su conocimiento de las relaciones transatlánticas seguramente le hizo comprender que el Reino Unido resultaría menos atractivo a Washington al margen de la UE que si permanecía en ella, como así parece haber ocurrido.

La cuarta dimensión de la acción exterior de la Reina que debe tenerse en cuenta es la referida a las antiguas posesiones británicas agrupadas en la Commonwealth of Nations, organismo que, como resultado del avance del proceso descolonizador, pasó de tener 15 miembros al inicio de su reinado a contar con 54 cuando falleció, y en cuyo territorio residían en 2022 unos 2,300 millones de habitantes, es decir, casi un tercio de la población mundial. Se ha repetido hasta la saciedad que Isabel II

otorgó siempre una importancia especial a su papel como cabeza visible de dicha organización, a pesar de que algunos de sus primeros ministros (sobre todo Mrs. Thatcher y Tony Blair) y buena parte de la opinión pública británica no compartieran su interés por la misma. De hecho, resulta curioso constatar que fue precisamente su dedicación a la Commonwealth lo que generó algunos de sus desencuentros más serios con sucesivos primeros ministros a lo largo de su reinado. Por ejemplo, su decisión de bailar con el dictador Kwame Nkrumah en una gala celebrada en 1961 para celebrar la independencia de Ghana (y su salida de la Commonwealth), en una época en la que el racismo imperante en Occidente hubiese hecho inconcebible hacerlo en EEUU, entre otros lugares, no fue visto con buenos ojos por el gobierno conservador de Macmillan, aunque luego se convertiría en uno de sus gestos más aplaudidos. Una década más tarde, y con gran disgusto de la Reina, Heath no le permitió asistir a la cumbre de la Commonwealth celebrada en Singapur, por temor a que la decisión de su gobierno de vender armas al régimen racista de Sudáfrica pudiese suscitar comentarios adversos que le resultaran incomodos. (Poco después, y en contra del consejo del Foreign Office, Isabel insistió en aceptar una invitación a Uganda, lo cual le permitiría averiguar de primera mano, e informar luego a su gobierno, que Idi Amin tenía intención de invadir de forma inmediata a otra excolonia británica, la vecina Tanzania.) La tensión que se había generado en el seno de la Commonwealth a raíz de la declaración unilateral de independencia protagonizada por Ian Smith en Rodesia en 1965 afectó profundamente a dicha organización durante más de una década, pero al parecer la actuación de la Reina en la cumbre celebrada en Zambia en 1979 contribuyó a calmar las aguas, que volvieron finalmente a su cauce un año más tarde, tras la creación del nuevo Estado de Zimbabue. Mucho más preocupante aun fue la crisis surgida con motivo de la negativa de Mrs. Thatcher a imponer sanciones económicas al régimen racista de Sudáfrica. Ello indignó a la Reina hasta tal punto que, tras la cumbre de la Commonwealth celebrada en Vancouver en 1987, en la que la postura obstruccionista de la primera ministra torpedeó un acuerdo al respecto, se planteó

seriamente la posibilidad de cancelar su reunión semanal con la 'dama de hierro' hasta que cambiara de opinión.

Con independencia de la relevancia de la aportación personal de la Reina Isabel a la continuidad y el buen funcionamiento de la Commonwealth, algunos críticos de esta organización han opinado que su propia existencia constituyó una rémora más que una ventaja, ya que no hizo sino perpetuar la nostalgia neocolonial de los sectores más conservadores de la sociedad británica, dificultando así la aceptación de la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias del papel del Reino Unido más allá de sus fronteras. Sin descartar por completo esta interpretación, y visto desde una perspectiva más constructiva, podría argumentarse que, debido en parte al protagonismo de la Corona, durante el reinado de Isabel la Commonwealth resultó un foro diplomático útil para el Reino Unido, al que le permitió golpear por encima de su peso económico y político en el escenario internacional. Por otro lado, el hecho de que en épocas recientes se hayan sumado a este organismo Estados que nunca fueron colonias británicas —como Mozambique, Ruanda, Gabón y Togo— parecería sugerir que la Commonwealth puede aportarles ventajas y posibilidades que sus críticos no son capaces de percibir.

La tercera dimensión del legado de la reina Isabel II que merece cierta atención es el referido a su papel como 'defensora de la fe y gobernadora suprema' de la Iglesia de Inglaterra y protectora de la Iglesia de Escocia. (A diferencia de Inglaterra y Escocia, en Gales e Irlanda del Norte no existen iglesias 'establecidas', o lo que es lo mismo, ninguna goza de un estatuto legal privilegiado.) Como es sabido, y al igual que otras sociedades europeas, la británica experimentó un proceso acelerado de secularización tras la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que entre 1983 y 2013 la proporción de la población que afirmaba no pertenecer a ninguna iglesia aumentó del 31% al 50% (según los datos recogidos en el British Social Attitudes Survey). Además, mientras que en 1983 un 40% de los entrevistados decía pertenecer a la Iglesia de Inglaterra, en 2014 esa cifra había pasa-

do a ser de tan solo un 16%. Al mismo tiempo, y como resultado de sucesivas oleadas migratorias, que se acentuaron en los años sesenta, en 2021 el 6.5% de la población británica ya era musulmana. En suma, si cuando ascendió al trono en 1952 la sociedad británica era predominantemente cristiana (y anglicana), siete décadas después había pasado a ser mayoritariamente agnóstica (o atea) y multicultural (y, por lo tanto, multi-religiosa).

Existen numerosos testimonios que permiten afirmar sin lugar a duda que la religión anglicana siempre tuvo una gran importancia para la Reina Isabel II, tanto en lo referido al ámbito personal como al institucional. Al igual que otras personas de su generación educadas en valores tradicionales, también puede afirmarse que la Reina experimentó cierto desasosiego al constatar la rapidez con la que se produjo el proceso de secularización antes mencionado, así como la generalización de fenómenos como el divorcio (incluso en su propia familia), que entraban en colisión con su visión religiosa de la condición humana. Cabe añadir a ello la importancia que siempre atribuyó a su papel como cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra y protectora de la continuidad institucional de la misma, entendida no solo (ni principalmente) como entidad religiosa, sino también como manifestación política y cultural, muy vinculada a la identidad británica. De ahí, por ejemplo, la incomodidad que le produjo la intención de su hijo y heredero, el príncipe Carlos, de acudir a una misa católica en el Vaticano a invitación del Papa Juan Pablo II en 1985 sin consultarla previamente, y su decisión de prohibirle que lo hiciera.

Curiosamente, sería el propio príncipe Carlos, animado por una notable curiosidad intelectual, quien ayudaría a la Reina a interpretar su papel al frente de la Iglesia de Inglaterra de forma crecientemente flexible y pragmática. En 1994, el heredero causó cierto revuelo al afirmar públicamente su deseo de convertirse algún día no en *defender of the faith* (título que se había otorgado a si mismo el rey Enrique VIII en 1521 al romper con la Iglesia de Roma), sino en *defender of faith*, es decir, en defen-

sor de la fe, o si se prefiere, de todas las manifestaciones religiosas, con independencia de su adscripción institucional. Aunque no llegara a compartir plenamente esta interpretación, en 2012, con ocasión de la celebración del sesenta aniversario de su coronación, la Reina afirmaría públicamente que una de las principales obligaciones institucionales de la Iglesia de Inglaterra era precisamente la de proteger a todas las religiones que tuvieran seguidores en el Reino Unido, y es probable que su interés por la Commonwealth fomentara en ella un profundo respeto por la libertad (y variedad) religiosa.

En contra de lo que pudiera pensarse, el papel de la Reina como cabeza visible de la Iglesia de Inglaterra no le hizo entrar en colisión con creyentes de otras religiones, como había ocurrido tan frecuentemente en el pasado, a menudo con consecuencias muy dolorosas. A medida que fue cumpliendo años, sus discursos de Navidad fueron adquiriendo un contenido religioso cada vez más marcado, y algunos temieron que, en una sociedad crecientemente multi-religiosa, ello podría molestar a quienes no profesaran la fe cristiana. Sin embargo, las encuestas revelan que las minorías religiosas presentes en la sociedad británica (católicos, musulmanes, hindúes, sijs y judíos, sobre todo), no eran generalmente partidarias de una separación formal entre la Iglesia de Inglaterra y el Estado, porque les parecía positivo que el monarca tuviese entre sus objetivos la defensa del hecho religioso. En vista de todo ello, es probable que uno de los retos más difíciles a los que deberá enfrentarse el Rey Carlos III consistirá no tanto en saber favorecer la convivencia entre quienes practican religiones distintas, sino en tender puentes entre una población creyente menguante y otra crecientemente indiferente (y en algunos casos hostil) ante el hecho religioso.

En suma, puede afirmarse que el principal legado de Isabel II de Inglaterra consistió sobre todo en haber sabido facilitar la transición de una sociedad que en buena medida había dejado de existir tras la Segunda Guerra Mundial hacia otra cada vez más plural y compleja, todo ello en el contexto de un orden

internacional en el cual el Reino Unido pasó rápidamente de ser un gran Imperio global a una mera potencia media europea. Al mismo tiempo, la Reina encarnó muchas de las fortalezas y certidumbres que puede ofrecer una Monarquía hereditaria en las sociedades contemporáneas, aportando estabilidad y continuidad en tiempos de grandes mudanzas.